

67. M. Nussbaum, *Los límites del patriotismo*
68. Ph. Pettit, *Republicanismo*
69. Ch. Mouffe, *El retorno de lo político*
70. D. Zolo, *Cosmopolis*
71. A. Touraine, *¿Cómo salir del liberalismo?*
72. S. Strange, *Dinero loco*
73. R. Gargarella, *Las teorías de la justicia después de Rawls*
74. J. Gray, *Falso amanecer*
75. P. Waldmann y F. Reinales (comps.), *Sociedades en guerra civil*
76. N. García Canclini, *La globalización imaginada*
77. B. R. Barber, *Un lugar para todos*
78. O. Lafontaine, *El corazón late a la izquierda*
79. U. Beck, *Un nuevo mundo feliz*
80. A. Calsamiglia, *Cuestiones de lealtad*
81. H. Bejar, *El corazón de la república*
82. J. -M. Guicheno, *El porvenir de la libertad*
83. J. Rifkin, *La era del acceso*
84. A. Gutmann, *La educación democrática*
85. H. D. Krasner, *Soberanía, hipocresía organizada*
86. J. Rawls, *El derecho de las gentes*
87. N. García Canclini, *Culturas híbridas*
88. F. Alfina, *El sistema político global*
89. J. Gray, *Las dos caras del liberalismo*
90. G. A. Cohen, *Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?*
91. R. Gargarella y F. Ovejero (comps.), *Razones para el socialismo*
92. M. Walzer, *Guerras justas e injustas*
93. N. Chomsky, *Estados canallas*
94. J. B. Thompson, *El escándalo político*
95. M. Hardt y A. Negri, *Imperio*
96. A. Touraine y F. Khosrokhavar, *A la búsqueda de sí mismo*
97. J. Rawls, *La justicia como equidad*
98. F. Ovejero, *La libertad inhóspita*
99. M. Caminal, *El federalismo pluralista*
100. U. Beck, *Libertad o capitalismo*
102. J. Rifkin, *La economía del hidrógeno*
105. N. García Canclini, *Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo*

Noam Chomsky

Estados canallas

El imperio de la fuerza
en los asuntos mundiales

Título original: *Rogue States*

Publicado en inglés, en 2000, en EE.UU. por South End Press, Cambridge, Mass.

Traducción de Mónica Salomon

Cubierta de Mario Eskenazi

327.1	Chomsky, Noam
CHO	Estados canallas : el imperio de la fuerza en los asuntos mundiales.- 1ª ed. 3ª reimp.- Buenos Aires : Paidós, 2002. 288 p. ; 23x15 cm.- (Estado y Sociedad)
	Traducción de: Mónica Salomon
	ISBN 950-12-5493-3
	I. Título -- 1. Política Internacional

1ª edición en Argentina, 2002

3ª reimpresión, 2002

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© 2000 by Diane Chomsky Irrevocable Trust

© 2001 de la traducción, Mónica Salomon

© 2001 de todas las ediciones en castellano

Editorial Paidós SAICP

Dolores 500, Buenos Aires

e-mail: literaria@editorialpaidos.com.ar

Ediciones Paidós Iberica SA

Mariano Cubi 92, Barcelona

Editorial Paidós Mexicana SA

Rubén Darío 118, México D.F.

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723

Impreso en la Argentina - Printed in Argentina

Impreso en Talleres Gráficos D'Aversa,

Vicente López 318, Quilmes, Buenos Aires, en octubre de 2002

Tirada: 1000 ejemplares

ISBN 950-12-5493-3

SUMARIO

1. La galería de los canallas: ¿quién está incluido?	9
2. Estados canallas	23
3. Crisis en los Balcanes	49
4. Retrospectiva de Timor oriental	69
5. «Plan Colombia»	81
6. Cuba y el gobierno estadounidense: David contra Goliath	109
7. Aumentar la presión: América Latina	121
8. Jubileo 2000	131
9. «La recuperación de los derechos»: un sendero tortuoso	141
10. Estados Unidos y el «desafío de la relatividad»	161
11. El legado de la guerra	203
12. Feliz milenio	221
13. El poder en la esfera interna.	239
14. Soberanía socioeconómica	253
Lista de abreviaturas	271
Índice analítico y de nombres	273

ESTADOS CANALLAS*

El concepto de «Estado canalla» desempeña en la actualidad un papel preeminente en la planificación y el análisis políticos. La crisis de Irak de abril de 1998 sólo es uno de los ejemplos más recientes. Washington y Londres han declarado a Irak «Estado canalla», amenaza para sus vecinos y para el mundo entero, «nación fuera de la ley» gobernada por una reencarnación de Hitler a la que los guardianes del orden mundial, Estados Unidos y su «socio menor» —para adoptar el término empleado con pesar por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico hace medio siglo— deben poner freno.¹

El concepto merece ser examinado de cerca. Pero, antes de pasar a ello, consideremos su aplicación en la crisis actual.

LA CRISIS DE IRAK

El rasgo más interesante del debate sobre la crisis de Irak es que ese debate nunca tuvo lugar. Es cierto que fluyeron muchas palabras y hubo una disputa sobre cómo proceder, pero la discusión se mantuvo dentro de los rígidos límites que excluían la respuesta obvia: Estados Unidos y el Reino Unido deberían actuar de acuerdo con sus leyes y con sus obligaciones contractuales.

El marco legal pertinente está formulado en la Carta de las Naciones Unidas, un «tratado solemne» reconocido como el fundamento del derecho internacional y el orden mundial, y en la Constitución de Estados Unidos, «la ley suprema del país».

La Carta establece que «el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42», en los que se especifican las «medidas que no implican el uso de la fuerza armada» consideradas más apropiadas

* Este artículo se publicó originalmente en *Z Magazine*, abril de 1998.

1. Mark Curtis, *The Ambiguities of Power*, Zed, 1995, pág. 146.

y que autorizan al Consejo de Seguridad a tomar otras iniciativas si considera que esas medidas son inadecuadas. La única excepción es el artículo 51, que permite «el derecho inmanente de legítima defensa» contra un «ataque armado [...] hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales». Fuera de estas excepciones, los Estados miembros «en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza [...]».

Hay maneras legítimas de reaccionar a las muchas amenazas que pueden poner en peligro la paz mundial. Si los vecinos de Irak se sienten amenazados, pueden pedir al Consejo de Seguridad que autorice medidas apropiadas para responder a la amenaza. Lo mismo pueden hacer EE.UU. y el Reino Unido si se sienten amenazados. Pero ningún Estado está autorizado a tomar sus propias decisiones sobre estas cuestiones y a actuar según su propia voluntad; EE.UU. y el Reino Unido no tendrían esa prerrogativa ni siquiera si sus propias manos estuvieran limpias, lo que está lejos de ser cierto.

Los Estados fuera de la ley no aceptan estas condiciones: el Irak de Saddam, por ejemplo, o Estados Unidos. La posición estadounidense fue expuesta con claridad por la secretaria de Estado Madeleine Albright, entonces embajadora ante las Naciones Unidas, cuando informó al Consejo de Seguridad durante una confrontación anterior con Irak de que EE.UU. actuaría «multilateralmente cuando podamos, y unilateralmente cuando debamos» porque «reconocemos que esta región es vital para los intereses nacionales de EE.UU.» y, por lo tanto, no aceptamos limitaciones externas. Albright reiteró esa posición cuando el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan emprendió una misión diplomática a Irak en febrero de 1998. «Le deseamos suerte» —afirmó Albright— «y cuando vuelva veremos qué ha conseguido y cómo encaja eso con nuestros intereses nacionales», lo que determinará cómo responderemos. Cuando Annan anunció que se había llegado a un acuerdo, Albright repitió la doctrina: «Es posible que vuelva con algo que no nos gusta, en cuyo caso actuaremos de acuerdo con nuestros intereses nacionales». El presidente Clinton anunció que si Irak no superaba la prueba de la conformidad (según los términos dictados por Washington), «todo el mundo entenderá que entonces Estados Unidos y —esperemos— todos nuestros aliados tenemos el derecho a responder unilateralmente en el momento, lugar y manera de nuestra elección», como también lo hacen otros Estados violentos y sin ley.²

² Jules Kagian, *Middle East International*, 21 de octubre de 1994; Kagian, *FT*, 19 de febrero de 1998; Steven Erlanger y Philip Shenon, *NYT*, 23 de febrero de 1998; conferen-

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad el acuerdo al que había llegado Annan, rechazando las exigencias de EE.UU./Reino Unido de que los autorizara a usar la fuerza en caso de falta de cumplimiento. La resolución advertía sobre «las más graves consecuencias», pero sin especificarlas. En el decisivo párrafo final, el Consejo «DECIDE, de conformidad con la responsabilidad que le incumbe en virtud de la Carta, seguir ocupándose activamente de la cuestión a fin de velar por la aplicación de la presente resolución y garantizar la paz y la seguridad de la región». El Consejo, nadie más, de acuerdo con los términos de la Carta.

Los hechos eran claros y nada ambiguos. En los titulares podía leerse: «No se apoya un ataque automático» (*Wall Street Journal*), «La ONU rechaza la amenaza de EE.UU. a Irak en caso de que quebrante el acuerdo» (*New York Times*), etc. El embajador británico ante la ONU «dio seguridad en privado a sus colegas en el Consejo de que la resolución no concede a Estados Unidos y al Reino Unido un “disparador automático” para lanzar ataques contra Irak si éste obstaculiza» la búsqueda de armas químicas por parte de las Naciones Unidas. «Ha de ser el Consejo de Seguridad quien determine cuándo hay que usar la fuerza armada», declaró el embajador de Costa Rica, expresando la posición del Consejo de Seguridad.

La reacción de Washington fue diferente. El embajador estadounidense Bill Richardson afirmó que el acuerdo «no impedía el uso unilateral de la fuerza» y que EE.UU. mantiene su derecho legal a atacar Bagdad a voluntad. El portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, despachó la redacción de la resolución como «no tan relevante como las discusiones en privado del tipo de las que hemos tenido»: «No estoy diciendo que esa resolución nos tenga sin cuidado», pero «hemos dejado claro que no vemos la necesidad de volver al Consejo de Seguridad si se produce una violación del acuerdo». El presidente afirmó que la resolución «da autoridad para actuar» si EE.UU. queda insatisfecho con el cumplimiento del acuerdo por parte de Irak; su secretario de prensa dejó claro que eso significa una actuación militar. «EE.UU. insiste en que mantiene el derecho de castigar a Irak», anunciaba con exactitud el titular del *New York Times*. EE.UU. tiene el derecho unilateral de usar la fuerza a voluntad. Punto.

Hubo quienes sintieron que incluso esta posición era demasiado cercana a nuestras obligaciones solemnes de acuerdo con el derecho internacio-

cia de prensa de Clinton, *NYT*, 24 de febrero de 1998; Aaron Zitner, *BG*, 21 de febrero de 1998.

nal y el interno. El líder mayoritario en el Senado, Trent Lott, denunció a la administración por haber «subcontratado» su política exterior «a otros»: al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El senador John McCain advirtió de que «EE.UU. puede estar subordinando su poder a las Naciones Unidas», una obligación que sólo tienen los Estados que obedecen la ley. El senador John Kerry añadió que sería «legítimo» para EE.UU. invadir Irak directamente si Saddam «sigue obstinándose y violando las resoluciones de las Naciones Unidas, en una posición de amenaza a la comunidad mundial», lo determine o no el Consejo de Seguridad. Semejante actuación unilateral estadounidense estaría «enmarcada en el derecho internacional», tal como Kerry lo concibe. Kerry, una paloma liberal que destacó en el ámbito nacional como opositor a la guerra de Vietnam, explicó que su posición actual era coherente con sus puntos de vista anteriores. Vietnam le enseñó que la fuerza debe usarse sólo si el objetivo es «realizable y si satisface las necesidades de tu país». La invasión de Saddam a Kuwait era, por lo tanto, errónea sólo por una razón: no era «realizable», tal como demostraron los hechos.³

En el extremo liberal-paloma del espectro, el acuerdo de Annan fue acogido favorablemente, pero dentro del estrecho marco que excluía las cuestiones fundamentales. La típica reacción del *Boston Globe* consistió en afirmar que si Saddam no se hubiera echado atrás, «el ataque a Irak por parte de Estados Unidos no sólo habría estado justificado, sino que también habría sido irresponsable no llevarlo a cabo», sin plantearse ningún otro interrogante. Los editores apelaron también a «un consenso universal del oprobio» contra las «armas de destrucción masiva» como «la mejor oportunidad que tiene el mundo de impedir que la ciencia pervertida inflija un daño no imaginado hasta ahora». Una propuesta sensata; es posible pensar en maneras fáciles de empezar a hacerlo sin recurrir a la amenaza de hacer uso de la fuerza, pero esto no es lo que se pretende.

El analista político William Pfaff deploró la poca disposición de Washington a consultar «opiniones teológicas o filosóficas» (las opiniones de Tomás de Aquino y del teólogo renacentista Francisco Suárez), como «una

3. Colum Lynch, *BG*, 3 de marzo de 1998; Weston, Costa Rica, *BG*, 3 de marzo de 1998; *WSJ*, 3 de marzo de 1998; Barbara Crossette, *NYT*, 3 de marzo de 1998; Laura Silber y David Buchan, *FT*, 4 de marzo de 1998; Steven Lee Myers, *NYT*, 4 de marzo de 1998; R. W. Apple, *NYT*, 24 de febrero de 1998 (Lott); Steven Erlanger y Philip Shenon, *NYT*, 23 de febrero de 1998 (McCain, Kerry); Aaron Zitner, «A Visible Kerry Turns Tough on Crisis», *BG*, 21 de febrero de 1998.

parte de la comunidad de analistas» en EE.UU. y en el Reino Unido había hecho «durante los años cincuenta y sesenta», pero no los fundamentos del derecho internacional e interno contemporáneos, que son claros y explícitos, aunque irrelevantes para la cultura intelectual. Otro analista liberal urgió a EE.UU. a enfrentarse al hecho de que si su poder incomparable «está siendo ejercido en bien de la humanidad, la humanidad pide opinar sobre su uso», algo que no permitiría «la Constitución, el Congreso ni las lumbreras de los programas de televisión dominicales»; «las demás naciones del mundo no han asignado a Washington el derecho de decidir cuándo, dónde y cómo debería actuarse al servicio de sus intereses» (Ronald Steel).

Resulta que la Constitución sí proporciona esos mecanismos, a saber, al declarar que los tratados válidos son «la ley suprema del país», particularmente el más importante de ellos, la Carta de las Naciones Unidas. Además autoriza al Congreso a «definir y castigar [...] ofensas contra el derecho de las naciones» que en la era contemporánea determina la Carta. Afirmar que las otras naciones «no han asignado a Washington el derecho» es una especie de eufemismo; las otras naciones han denegado enérgicamente ese derecho, siguiendo el liderazgo (al menos retórico) de Washington, que en gran medida diseñó la Carta.⁴

Normalmente se ha considerado que la referencia a las violaciones de las resoluciones de la ONU por parte de Irak implica que los dos Estados guerreros tienen el derecho de usar la fuerza unilateralmente, asumiendo el papel de «policías mundiales», un insulto para los policías, que en principio se ocupan de aplicar la ley, no de hacerla trizas. Se ha criticado la «arrogancia de poder» de Washington, una expresión que no es la más adecuada para referirse a un autoproclamado Estado violento y fuera de la ley.

Se podría idear una tortuosa argumentación legal en apoyo de las reivindicaciones de EE.UU./Reino Unido, aunque nadie ha tratado de hacerlo realmente. El primer paso consistiría en afirmar que Irak ha violado la resolución 687 del 3 de abril de 1991, que declara un alto el fuego «tras la notificación oficial de Irak» de que acepta las disposiciones que se establecen en ella (destrucción de armas, inspecciones, etc.). Probablemente es la resolución del Consejo de Seguridad más larga y más detallada hasta la fecha, pero no menciona ningún mecanismo de aplicación. El paso dos de la argumentación, por lo tanto, sería afirmar que la falta de cumplimiento de Irak

4. Editorial, *BG*, 27 de febrero de 1998; William Pfaff, *BG*, 23 de febrero de 1998; Ronald Steel, *NYT*, 1 de marzo de 1998.

«reinvoca» la resolución 678.⁵ Esa resolución autoriza a los Estados miembros «a usar todos los medios necesarios para hacer respetar y aplicar la resolución 660»,⁶ que conmina a Irak a retirarse inmediatamente de Kuwait y a Irak y a Kuwait a «iniciar inmediatamente intensas negociaciones para la resolución de sus diferencias», recomendando el marco de la Liga Árabe. La resolución 678 invoca también «todas las resoluciones subsiguientes pertinentes» (y las enumera: 662, 664); son «pertinentes» porque se refieren a la ocupación de Kuwait y a las acciones iraquíes relacionadas con ella. Volver a invocar la 678 deja, pues, las cosas como estaban: sin ninguna autorización para usar la fuerza para aplicar la posterior resolución 687, que se refiere a temas completamente diferentes y no autoriza nada excepto las sanciones.

No hay necesidad de debatir la cuestión. EE.UU. y el Reino Unido podrían haber despejado rápidamente cualquier duda pidiendo al Consejo de Seguridad que autorizara la «amenaza y uso de la fuerza», tal como exige la Carta. El Reino Unido dio algunos pasos en esa dirección, pero los abandonó muy pronto, cuando resultó evidente que el Consejo de Seguridad no aceptaría. La iniciativa de Blair, rápidamente retirada, fue un «error» porque «debilitó la posición angloamericana», concluyó un editorial del *Financial Times*.⁷ Pero estas consideraciones tienen poca relevancia en un mundo dominado por Estados canallas que rechazan el imperio de la ley.

Supongamos que el Consejo de Seguridad autorizara el uso de la fuerza para castigar a Irak por violar la resolución del cese de fuego (ONU, 687). Esa autorización haría un llamamiento a *todos* los Estados: por ejemplo, a Irán, que, por lo tanto, estaría autorizado a invadir el sur de Irak para patrocinar una rebelión. Irán es un vecino y una víctima de la agresión y de la guerra química iraquíes, apoyadas por EE.UU., y podría argumentar que su invasión cuenta con cierto apoyo local, lo que no resulta inverosímil; ni EE.UU. ni el Reino Unido pueden argumentar nada semejante. Esas actuaciones iraníes, si es que pueden imaginarse, nunca se tolerarían, pero serían mucho menos ultrajantes que los planes de quienes se han designado a sí mismos encargados de aplicar la ley. Resulta difícil imaginar que unas observaciones elementales como éstas entren en los debates públicos que tienen lugar en EE.UU. y el Reino Unido.

5. 29 de noviembre de 1990.

6. 2 de agosto de 1990.

7. Editorial, *FT*, 2 de marzo de 1998.

DESPRECIO NO DISIMULADO

El desprecio por el imperio de la ley está profundamente arraigado en la práctica y en la cultura intelectual de EE.UU. Recordemos, por ejemplo, la reacción ante la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 1986 que condenó a EE.UU. por el «uso ilegal de la fuerza» contra Nicaragua en la que le exigía desistir y pagar unas importantes reparaciones y en la que declaraba que toda la ayuda estadounidense a la contra, fuera cual fuera su carácter, era «ayuda militar», no «ayuda humanitaria». El Tribunal fue denunciado en todas partes por haberse desacreditado a sí mismo. Los términos de la sentencia no fueron considerados adecuados como para aparecer impresos y no se tuvieron en cuenta.

El Congreso, controlado por los demócratas, autorizó inmediatamente nuevos fondos para aumentar el uso ilegal de la fuerza. Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad que hacía un llamamiento a todos los Estados a respetar el derecho internacional, sin mencionar a nadie, aunque la intención quedaba clara. Cuando la Asamblea General aprobó una resolución similar, EE.UU. votó en contra, acompañado sólo por Israel y El Salvador, con lo que consiguió vetarla; el año siguiente sólo pudo conservar el voto automático de Israel. Poco de esto —y mucho menos su significado— recibió la atención de los medios de comunicación o de los artículos de opinión.

El secretario de Estado George Shultz explicó, mientras tanto, que las «negociaciones son un eufemismo de capitulación si la sombra del poder no se proyecta sobre la mesa de reuniones».⁸ Condenó a aquellos que abogan por «medios utópicos, legalistas, tales como la mediación exterior, las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, mientras que omiten el elemento de poder de la ecuación», unos sentimientos que no carecen de precedentes en la historia moderna.⁹

El desprecio indisimulado por el artículo 51 resulta particularmente revelador. Se demostró con notoria claridad inmediatamente después de los acuerdos de Ginebra de 1954 que establecían una solución pacífica al conflicto de Indochina y que fueron considerados un «desastre» por parte de Washington, que inmediatamente actuó con el fin de invalidarlos. El Conse-

8. Véase cap. 1, pág. 13, de esta obra.

9. Véase mi *The Culture of Terrorism*, Cambridge, MA., South End Press, 1988, págs. 67 y sigs. (trad. cast.: *La cultura del terrorismo*, Barcelona, Ediciones B, 1989) y mi *Necessary Illusions*, *op. cit.*, págs. 82 y sigs., págs. 94 y sigs., pág. 270.

jo de Seguridad Nacional decretó en secreto que incluso en caso de «subversión local comunista o rebelión que *no constituya ataque armado*», EE.UU. consideraría la posibilidad de hacer uso de la fuerza militar, incluyendo un ataque a China si ésta fuera «considerada como el origen» de la «subversión». ¹⁰ Los términos del enunciado, repetido literalmente todos los años en los documentos de planificación, se eligieron para hacer explícito el derecho de EE.UU. a violar el artículo 51. El mismo documento pedía la remilitarización de Japón y la transformación de Tailandia en «el punto focal de las operaciones encubiertas y de guerra psicológica en el sudeste asiático», la realización de «operaciones encubiertas efectivas a gran escala» en toda Indochina y, en general, el uso de la fuerza para anular el efecto de los acuerdos y de la Carta de las Naciones Unidas. Este importantísimo documento fue burdamente falsificado por los historiadores que se ocuparon de los *Pentagon Papers* y prácticamente ha desaparecido de la historia.

En su definición de «agresión», EE.UU. incluyó «guerra política o subversión» (es decir, por algún otro), lo que Adlai Stevenson llamó «agresión interna» para defender la escalada de Kennedy hasta llegar a un ataque total contra Vietnam del Sur. Cuando EE.UU. bombardeó las ciudades libias en 1986, la justificación oficial fue «defensa propia contra ataque futuro». El especialista legal del *New York Times*, Anthony Lewis, felicitó a la administración por basarse «en un argumento legal según el cual la violencia [en este caso] está justificada como acto de defensa propia» según una interpretación creativa del artículo 51 de la Carta que habría hecho enrojecer a un buen estudiante de secundaria. La invasión estadounidense de Panamá fue defendida en el Consejo de Seguridad por el embajador Thomas Pickering apelando al artículo 51, el cual, según declaró, «permite el uso de la fuerza armada para defender un país, para defender nuestros intereses y nuestro pueblo» y autoriza a EE.UU. a invadir Panamá para impedir que «se use su territorio como base para introducir drogas en Estados Unidos». La opinión pública educada asintió modosamente.

En junio de 1993, Clinton ordenó un ataque con misiles contra Irak que produjo víctimas civiles y que reconfortó considerablemente al presidente, a las palomas del Congreso y a la prensa, que consideró que el ataque había sido «apropiado, razonable y necesario». Los comentaristas quedaron particularmente impresionados por las referencias que hizo la embajadora Albright al artículo 51. El bombardeo, explicó, era en «defensa propia contra ataque armado», o sea, contra un supuesto intento de asesinato al ex presi-

10. National Security Council 5429/2, la cursiva es mía.

dente Bush que tuvo lugar dos meses antes, un argumento que apenas habría estado por encima del nivel de lo absurdo aun en caso de que EE.UU. hubiera podido demostrar que Irak estuviese involucrado en el intento; «funcionarios de la administración, en declaraciones anónimas», informaron a la prensa de «que la creencia en la culpabilidad de Irak estaba basada, no tanto en pruebas férreas, sino en indicios circunstanciales y en análisis», informó el *New York Times*, sin dar mayor importancia al asunto. La prensa aseguró a la opinión pública de élite que las circunstancias «se ajustaban completamente» al artículo 51 (*Washington Post*). «Todo presidente tiene la obligación de usar la fuerza militar para proteger los intereses de la nación» (*New York Times*, que expresaba cierto escepticismo sobre ese caso en concreto). «Diplomáticamente, ésta era la argumentación más adecuada» y «la referencia de Clinton a la Carta de las Naciones Unidas transmitía el deseo estadounidense de respetar el derecho internacional» (*Boston Globe*). El artículo 51 «permite a los Estados responder militarmente si son amenazados por una potencia hostil» (*Christian Science Monitor*). El artículo 51 autoriza a un Estado a usar la fuerza «en defensa propia contra amenazas a sus ciudadanos», declaró el secretario de Estado británico Douglas Hurd en el Parlamento en apoyo al «justificado y proporcionado ejercicio del derecho a la legítima defensa» de Clinton. Habría un «peligroso estado de parálisis» en el mundo, prosiguió Hurd, si EE.UU. se viera obligado a obtener la aprobación del Consejo de Seguridad antes de lanzar misiles contra un enemigo que podría —o no— ser responsable del intento fallido de matar a un ex presidente dos meses antes. ¹¹

Estos antecedentes demuestran lo justificados que están los temores tan ampliamente difundidos con respecto a esos «Estados canallas» que actúan mediante la fuerza y en defensa de su «interés nacional» en los términos definidos por el poder interno y, lo que resulta más inquietante, que se nombran a sí mismos jueces y ejecutores globales.

11. Véase mi *For Reasons of State*, *op. cit.*, págs. 100 y sigs.; *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Realworld*, Claremont, 1986; Montreal, Quebec, Black Rose Books, 1987; Amana, 1988, pág. 140; el embajador ante las Naciones Unidas Thomas Pickering y el Departamento de Justicia están citados en mi *Deterring Democracy*, *op. cit.*, pág. 147 y en *World Orders Old and New*, *op. cit.*, págs. 16 y sigs.; George Kahin, *Intervention*, Knopf, 1986, pág. 74.

ESTADOS CANALLAS: EL CONCEPTO ESPECÍFICO

También resulta interesante pasar revista a los temas que entraron en el «no debate» sobre la crisis de Irak. Pero antes digamos unas palabras sobre el concepto de «Estado canalla».

La idea básica es que, aunque la guerra fría ha terminado, EE.UU. sigue teniendo la responsabilidad de proteger al mundo, pero ¿de qué? Está claro que no puede ser de la amenaza del «nacionalismo radical», es decir, de la falta de voluntad para someterse a la voluntad de los más poderosos. Esas ideas sólo son adecuadas para los documentos de planificación interna, no para el público en general. Desde principios de los años ochenta quedó claro que las técnicas convencionales para la movilización de masas —el uso por parte de Kennedy de «la conspiración monolítica y despiadada», el «imperio del mal» de Reagan— estaban perdiendo su efectividad: se necesitaban nuevos enemigos.

En el interior del país, el temor a la criminalidad —sobre todo a las drogas— se estimuló mediante «cierto número de factores que poco o nada tienen que ver con la criminalidad en sí misma», concluyó la Comisión Nacional de Justicia Criminal, lo que incluía las prácticas de los medios de comunicación y «el papel del gobierno y de la industria privada en la creación del temor ciudadano», «explotando tensiones raciales latentes con fines políticos» con sesgos raciales en la aplicación de la ley y de las sentencias que son devastadores para las comunidades negras y que crean un «abismo racial» que pone a «la nación al borde de una catástrofe social». Sus resultados han sido descritos por los criminólogos como «el Gulag norteamericano», «el nuevo *apartheid* estadounidense», siendo los afroamericanos, por primera vez en la historia de EE.UU., la mayoría de las personas encarceladas, y en una proporción alrededor de siete veces superior a los blancos, en total desproporcionadamente a los negros en relación con el uso y tráfico de drogas.¹²

En el extranjero, las amenazas serían el «terrorismo internacional», los «narcotraficantes hispanos» y, la más seria de todas, los «Estados canallas». Un estudio secreto de 1995 del Mando Estratégico, que es el responsable del

arsenal nuclear estratégico, subraya los conceptos básicos. El estudio, *Essentials of Post-Cold War Deterrence* [Elementos fundamentales de la disuasión en la posguerra fría], hecho público mediante la ley de libertad de información, «muestra cómo EE.UU. desplazó su estrategia de disuasión desde la difunta Unión Soviética hasta los llamados Estados canallas tales como Irak, Libia, Cuba y Corea del Norte», informa Associated Press. El estudio aboga por que EE.UU. explote su arsenal nuclear y así se retrate a sí mismo como «irracional y vengativo si sus intereses vitales son atacados». Eso «debería formar parte del personaje nacional que proyectamos a todos nuestros adversarios», en particular a los «Estados canallas». «Resulta perjudicial presentarnos demasiado racionales y cerebrales», y mucho menos comprometidos con semejante estupidez como el derecho internacional y las obligaciones contractuales. «El hecho de que algunos elementos» del gobierno de EE.UU. «se perciban como potencialmente “fuera de control” puede resultar beneficioso para crear y reforzar temores y dudas en las mentes de los decisores adversarios». El informe resucita la «teoría del loco» de Nixon: nuestros enemigos deberían reconocer que estamos locos y somos impredecibles, con una extraordinaria fuerza destructiva a nuestra disposición, por lo que se inclinarán ante nuestra voluntad por temor. El concepto parece que fue ideado en Israel en los años cincuenta por el Partido Laborista entonces en el gobierno, cuyos líderes «predicaban a favor de los actos de locura», recuerda en su diario el Primer ministro Moshe Sharett, y advertían de que «nos volveremos locos» (*nishtagea*) si nos enfadamos, un «arma secreta» dirigida en parte contra EE.UU., no considerado suficientemente fiable en la época. En manos de la única superpotencia mundial, que se ve a sí misma como un Estado fuera de la ley y está sujeta a pocas restricciones por parte de sus élites internas, esa postura plantea al mundo un problema nada pequeño.¹³

Libia fue escogida como «Estado canalla» desde los primeros tiempos de la administración Reagan. Vulnerable y sin defensa, es un perfecto *punching bag** cuando se la necesita: por ejemplo, en 1986, cuando tuvo lugar el primer bombardeo de la historia orquestado para aparecer en la franja de mayor audiencia de la televisión, lo usaron los redactores de discursos del Gran Comunicador para recabar apoyo a los ataques de las fuerzas terroristas de Washington contra Nicaragua, con el argumento de que el «archite-

12. Steven Donziger (comp.), *The Real War on Crime: The Report of the National Criminal Justice Commission*, HarperCollins, 1996; Nils Christie, *Crime Control as Industry*, Routledge, 1993; Michael Tonry, *Malign Neglect: Race, Crime, and Punishment in America*, Oxford, 1995; Randall Shelden y William Brown, *Criminal Justice*, Wadsworth, en preparación. Véase el cap. 5.

13. «Irrationality Suggested to Intimidate US Enemies», AP, BG, 2 de marzo de 1998. Véase los caps. 1, 7 y 8 para más detalles. Sobre la teoría israelí véase mi *Fateful Triangle*, pp. 100, pags. 464 y sigs.

* Saco de arena de los boxeadores. (N. del e.)

terrorista» Gadafi «ha enviado 400 millones de dólares y un arsenal de armas y de consejeros a Nicaragua para llevar su guerra a Estados Unidos», quien, por tanto, ejercía su derecho a la defensa propia mediante el ataque armado al Estado canalla nicaragüense.

Inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín, que acabó con la posibilidad de recurrir a la amenaza soviética, la administración Bush hizo su petición anual al Congreso de un elevado presupuesto para el Pentágono. Explicó que «en una nueva era, podemos prever que nuestro poder militar seguirá siendo un importante apuntalamiento del equilibrio global, pero [...] puede que las exigencias que más probablemente se planteen con respecto al uso de nuestras fuerzas militares no involucren a la Unión Soviética y tal vez en el Tercer Mundo hagan falta nuevas capacidades y enfoques», como «cuando el presidente Reagan dirigió las fuerzas navales y aéreas estadounidenses para volver [a Libia] en 1986» y bombardear objetivos civiles urbanos, guiado por el propósito de «contribuir a un entorno internacional de paz, libertad y progreso dentro del cual nuestra democracia — y otras naciones libres— pueda florecer». La principal amenaza a la que nos enfrentamos es el «creciente avance tecnológico» del Tercer Mundo. Debemos, por lo tanto, reforzar «la defensa industrial básica» —o sea la industria de alta tecnología— creando incentivos «para invertir en nuevas facilidades e instalaciones, así como en investigación y desarrollo». Y debemos mantener las fuerzas de intervención, en especial las que tienen como objetivo Oriente Próximo, donde las «amenazas a nuestros intereses» que han exigido un compromiso militar directo «no están situadas en las puertas del Kremlin», contrariamente a las interminables mentiras que se contaban, ahora en desuso. Tal como se había reconocido ocasionalmente en años anteriores, a veces en secreto, la «amenaza» que se considera oficialmente propia de la región es el «nacionalismo radical», que siempre ha sido una preocupación fundamental, no sólo en Oriente Próximo.¹⁴

En esa época, las «amenazas a nuestros intereses» tampoco podían situarse en las puertas de Irak. Saddam era entonces un amigo y el socio comercial favorito. Su estatus cambió sólo unos meses después, cuando malinterpretó la buena disposición estadounidense de permitirle modificar por la fuerza la frontera con Kuwait como una autorización para ocupar el país o, desde la perspectiva de la administración Bush, para imitar lo que EE.UU. acababa de hacer en Panamá. En una reunión de alto nivel inmediatamente

posterior a la invasión de Kuwait por parte de Saddam, el presidente Bush expuso el problema básico: «Lo que me inquieta de los saudíes es que [...] van a ceder en el último minuto y aceptarán un gobierno títere en Kuwait». El presidente del mando conjunto Colin Powell planteó el problema con precisión: «[En] los próximos días Irak se retirará» dejando su «marioneta» y «todos estarán contentos en el mundo árabe».¹⁵

Los paralelismos históricos nunca son exactos, desde luego. Cuando Washington se retiró parcialmente de Panamá tras dejar su marioneta, hubo un gran descontento en todo el continente, incluyendo Panamá, y sin duda en gran parte del mundo, lo que obligó a Washington a vetar dos resoluciones del Consejo de Seguridad y a votar contra una resolución de la Asamblea General que condenaba la «flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados» por parte de Washington y hacía un llamamiento a la retirada de «las fuerzas armadas invasoras estadounidenses de Panamá». La invasión iraquí de Kuwait recibió un trato diferente, en cierto modo alejado de la versión estándar pero pronto consolidado en la prensa.

Los hechos inexpresables proporcionan una visión interesante sobre los comentarios de los analistas políticos: Ronald Steel, por ejemplo, reflexiona sobre el «dilema» que se le planteaba a EE.UU. que, «como la nación más poderosa del mundo, se enfrenta a unas mayores constricciones a su libertad de usar la fuerza que cualquier otro país», de ahí el éxito de Saddam en Kuwait en comparación con la poca capacidad de Washington para ejercer su voluntad en Panamá.¹⁶

Merece la pena recordar que el debate también fue eficazmente evitado en 1990-1991. Hubo muchas discusiones sobre si las sanciones funcionarían, pero ninguna sobre si ya habían funcionado, quizá poco después de la

15. Sobre estas cuestiones y lo que sigue, véanse mis artículos en *Z Magazine* de 1990-1991; *El miedo a la democracia*, op. cit., caps. 4-6, palabras finales; *Powers and Prospects*, op. cit., cap. 6; mi artículo en Cynthia Peters (comp.), *Collateral Damage: The «New World Order» at Home and Abroad*, South End, 1992. Véanse también Dilip Hiro, *Desert Shield to Desert Storm*, Routledge, 1992; Douglas Kellner, *The Persian Gulf TV War*, Westview, 1992; Miron Rezun, *Saddam Hussein's Gulf Wars*, Praeger, 1992, y muchas otras recopilaciones útiles. También hay una muy (auto)ensalzada «historia académica» escrita por Lawrence Freedman y Efraim Karsh que contiene información útil pero con omisiones y errores graves: *The Gulf Conflict 1990-1991: Diplomacy and War in the New World Order*, Princeton, 1992. Véase mi *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, op. cit., cap. 1, n. 18, y mi «World Order and Its Rules», *Journal of Law and Society*, Cardiff, Gales, verano de 1993.

16. Ronald Steel, *NYT*, 1 de marzo de 1998.

14. George Bush, *National Security Strategy of the United States*, Casa Blanca, marzo de 1990; véanse citas más amplias en mi *El miedo a la democracia*, op. cit., cap. 1.

aprobación de la resolución 660. El temor a que las sanciones funcionaran impulsó la negativa de Washington a considerar los ofrecimientos de retirada que hizo Irak desde agosto de 1990 hasta principios de enero de 1991. Muy excepcionalmente, el sistema de información mantuvo una estricta disciplina sobre la cuestión. Las encuestas realizadas unos días antes del bombardeo de 1991 registraron un apoyo de dos a uno a una solución pacífica basado en la retirada iraquí y en la celebración de una conferencia internacional sobre el conflicto árabe-israelí. Pocos de entre quienes expresaron esa posición pudieron haber oído defenderla públicamente; los medios de comunicación habían seguido lealmente el liderazgo presidencial, rechazando la «vinculación» como impensable... en este único caso. Es poco probable que alguno de los que respondieron a la encuesta supiera que sus puntos de vista eran compartidos por la oposición democrática iraquí, excluida de los principales medios de comunicación, o que una semana antes unos funcionarios estadounidenses habían considerado una propuesta iraquí en los mismos términos y la habían encontrado razonable, aunque Washington la rechazó de plano, o que ya a mediados de agosto el Consejo de Seguridad Nacional había considerado un ofrecimiento de retirada de Irak pero éste había sido rechazado y ocultado eficazmente, aparentemente porque se temía que las iniciativas iraquíes inmencionables «difuminaran la crisis», para usar los oscuros términos con los que el corresponsal diplomático del *New York Times* se refirió a los temores de la administración.

Desde entonces Irak ha desplazado a Irán y a Libia como el principal «Estado canalla». Otros no han entrado nunca en esa categoría. Quizás el caso más significativo sea el de Indonesia, que pasó de ser enemiga a amiga cuando el general Suharto asumió el poder en 1965, presidiendo una matanza estilo Ruanda que provocó gran satisfacción en Occidente. Desde entonces Suharto ha sido «nuestro hombre», según los términos usados por la administración Clinton, al tiempo que llevaba a cabo agresiones asesinas y atrocidades sin fin contra su propio pueblo, matando a 10.000 indonesios sólo en los años ochenta, según el testimonio personal de «nuestro hombre», quien escribió que «no se retiraron los cadáveres para que sirvieran de terapia de choque».¹⁷ En diciembre de 1975 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó por unanimidad a Indonesia proceder a la retirada de sus fuerzas invasoras de Timor oriental «sin demora» e hizo un llamamiento a «todos los Estados a respetar la integridad territorial de Timor oriental, así como el derecho inalienable de su pueblo a la auto-

17. Citado por Charles Glass, *Prospect*, Londres, marzo de 1998.

determinación». EE.UU. respondió con el envío (secreto) de cada vez más armas a los agresores; Carter aceleró el flujo armamentístico una vez más cuando el ataque alcanzó unos niveles cercanos al genocidio en 1978. En sus memorias, el embajador estadounidense ante la ONU, Daniel Patrick Moynihan, se enorgullece de su éxito al hacer aparecer a las Naciones Unidas como «sumamente ineficaces en toda medida que tomaran», siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado, que «deseaba que las cosas ocurrieran tal como ocurrieron y trabajó para lograrlo». EE.UU. acepta también alegremente el robo del petróleo de Timor oriental (con la participación de una compañía estadounidense), lo que constituye una violación de los acuerdos internacionales bajo cualquier interpretación razonable que se haga de ellos.¹⁸

La analogía con Irak/Kuwait es evidente, aunque hay diferencias: para mencionar sólo las más obvias, las atrocidades patrocinadas por EE.UU. en Timor oriental fueron de un alcance mucho mayor que el de cualquiera que haya sido atribuida a Saddam Hussein en Kuwait.

Hay muchos otros ejemplos, aunque algunos de los que suelen invocarse deberían tratarse con cautela, particularmente los que conciernen a Israel. Las víctimas civiles de la invasión de Israel a Líbano —respaldada por EE.UU.— en 1982 superaron las de Saddam en Kuwait, e Israel sigue violando una resolución del Consejo de Seguridad de 1978 que le ordena retirarse inmediatamente de Líbano, junto con otras numerosas resoluciones sobre Jerusalén, los Altos del Golán y otras cuestiones; y existirían muchas más resoluciones semejantes si EE.UU. no las vetara con regularidad. Pero las acusaciones que suelen hacerse a Israel, y en particular a su actual gobierno, de que está violando la resolución 242 de las Naciones Unidas y los acuerdos de Oslo, y la de que EE.UU. muestra un «doble rasero» al tolerar esas violaciones son, en el mejor de los casos, dudosas, y están basadas en serios malentendidos en la interpretación de dichos acuerdos. Desde un buen principio, el proceso Madrid-Oslo fue diseñado y aplicado por el poder israelí-estadounidense para imponer una solución estilo bantustán. El mundo árabe ha preferido engañarse a sí mismo sobre esta cuestión, igual que muchos otros, pero está claro en los actuales documentos y particularmente en los proyectos —apoyados por EE.UU.— de los gobiernos Rabin-Peres, incluyendo aquellos por los que el gobierno del Likud de Netanyahu ha sido denunciado.¹⁹

18. Véanse caps. 1 y 4.

19. Véanse mis artículos en *Z Magazine* desde la conferencia de Madrid en 1991 hasta la conferencia de Oslo en 1993 y después. También *El miedo a la democracia*, op. cit., cap. 6 y

La afirmación de que «no está demostrado que Israel haya violado los decretos del Consejo de Seguridad»²⁰ es claramente falsa, pero las razones que suelen darse deberían examinarse cuidadosamente.

Volviendo a Irak, con seguridad reúne los méritos para ser considerado un importante Estado criminal. Al defender el plan estadounidense de atacar a Irak en un encuentro público televisado el 18 de febrero de 1998, los secretarios Albright y Cohen invocaron repetidamente la mayor atrocidad: Saddam era culpable de «usar armas de destrucción masiva contra sus vecinos, así como contra su propio pueblo», su crimen más horrendo. «Es muy importante que dejemos claro que Estados Unidos y el mundo civilizado no pueden tratar con alguien que pretende usar esas armas de destrucción masiva contra su propio pueblo, por no hablar de sus vecinos», dijo Albright enfáticamente en una agria respuesta a alguien que preguntaba sobre el apoyo estadounidense a Suharto. Poco después el senador Lott condenó a Kofi Annan por intentar cultivar «relaciones humanas con un asesino de masas» y denunció a la administración por confiar en una persona capaz de caer tan bajo.

Sonoras palabras. Dejando de lado la manera en que se evadió la pregunta formulada, Albright y Cohen sólo olvidaron mencionar —y los comentaristas han sido lo suficientemente amables como para no señalarlo— que los actos que ahora encuentran tan horrendos no convirtieron a Irak en un «Estado canalla». Y Lott no señaló que sus héroes Reagan y Bush forjaron unas relaciones inusualmente cálidas con el «asesino de masas». No hubo ningún llamamiento apasionado a un ataque militar cuando Saddam gaseó a los kurdos en Halabja en marzo de 1988; al contrario, EE.UU. y el Reino Unido prestaron un importante apoyo al asesino de masas, que entonces era también «nuestro hombre». Cuando el corresponsal de ABC TV Charles Glass reveló el emplazamiento de uno de los programas de armas biológicas de Saddam diez meses después de Halabja, el Departamento de Estado negó los hechos y la historia murió; el Departamento «informa ahora sobre el mismo emplazamiento», observa Glass.

Los dos guardianes del orden global también facilitaron las otras atrocidades de Saddam —incluyendo el uso de cianuro, gas nervioso y otras ar-

palabras finales; *Powers and Prospects*, op. cit., cap. 6; *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, op. cit., cap. 3 y epílogo, así como las fuentes allí citadas. Para una mayor actualización véase mi «The "Peace Process" in US Global Strategy», ponencia para la conferencia de la Universidad Ben-Gurion, junio de 1997, publicada en Haim Gordon (comp.), *Looking Back at the June 1967 War*, Praeger, 1999, y mi *Fateful Triangle*, op. cit.

20. Serge Schmemmann y Douglas Jehl, *NYT*, 27 de febrero de 1998.

mas bárbaras— con información, tecnología y suministros, igual que muchos otros. El Comité de Banca del Senado informó en 1994 de que el Departamento de Comercio de EE.UU. había localizado envíos de «materiales biológicos» idénticos a los encontrados más tarde y destruidos por los inspectores de la ONU, recuerda Bill Blum. Esos envíos continuaron al menos hasta noviembre de 1989. Un mes más tarde Bush autorizó nuevos préstamos a su amigo Saddam para lograr la «meta de aumentar las exportaciones de EE.UU. y ponernos en una mejor posición para tratar con Irak con respecto a sus actuaciones en el terreno de los derechos humanos», anunció el Departamento de Estado con rostro de piedra, sin recibir ninguna crítica (ni aparecer en ninguna noticia) por parte de la opinión mayoritaria.

Las actuaciones británicas salieron a la luz, al menos en parte, en una investigación oficial (la investigación Scott). El gobierno británico acaba de ser obligado a reconocer que continuó concediendo licencias a empresas británicas para exportar materiales utilizables para la construcción de armas biológicas después de que se publicara el informe de la investigación Scott, al menos hasta diciembre de 1996.

En un informe del 28 de febrero de 1998 sobre las ventas occidentales de materiales susceptibles de ser utilizados para la guerra bacteriológica y otras armas de destrucción masiva, el *New York Times* menciona un ejemplo de las ventas estadounidenses en los ochenta que incluyeron «agentes patógenos mortales», con la aprobación del gobierno, algunos provenientes del centro del ejército para investigación bacteriológica en Fort Detrick. Sin embargo, esto no es más que la punta del iceberg.²¹

Se suele fingir que los crímenes de Saddam eran desconocidos, por lo que ahora nos sentimos apropiadamente conmocionados ante el descubrimiento y debemos «dejar claro» que nosotros, personas civilizadas, «no podemos tratar con» el perpetrador de tales crímenes (en palabras de Albright). Esa postura es un fraude cínico. Los informes de las Naciones Unidas de 1986 y 1987 condenaban el uso de armas químicas por parte de Irak. Fun-

21. Véanse las fuentes citadas antes. Albright, Cohen, reportaje en directo de la CNN, Ohio State University, 18 de febrero de 1998; transcripción parcial (omitiendo el intercambio de palabras citado), *NYT*, 19 de febrero de 1998. Trent Lott, *BG*, 26 de febrero de 1998. Charles Glass, *New Statesman*, 20 de febrero de 1998. Bill Blum, *Consortium*, 2 de marzo de 1990. William Broad y Judith Miller, *NYT*, 26 de febrero de 1998. Informe de la investigación Scott, febrero de 1996. Gerald James, *In the Public Interest*, Londres, Little, Brown, 1996. Alan Friedman, *Spider's Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq*, Bantam, 1993. Mark Phythian, *Arming Iraq: How the US and Britain Secretly Built Saddam's War Machine*, Northeastern University Press, 1997.

cionarios de la embajada estadounidense en Turquía entrevistaron a supervivientes turcos de ataques de armas químicas y la CIA transmitió esa información al Departamento de Estado. Los grupos de derechos humanos informaron sobre las atrocidades de Halabja y de otras partes inmediatamente después de que se cometieran. El secretario de Estado George Shultz admitió que EE.UU. tenía pruebas sobre ellas. Un equipo de investigación enviado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 1988 encontró «pruebas abrumadoras de un uso generalizado de armas químicas contra civiles», sosteniendo que la aquiescencia occidental con respecto al uso de tales armas por parte iraquí contra Irán había llevado a Saddam a creer —correctamente— que podía usarlas contra su propio pueblo con impunidad, en realidad contra los kurdos, que no son precisamente «el pueblo» de ese criminal tribal. El presidente del comité, Claiborne Pell, aludió a la ley de prevención del genocidio de 1988, denunciando el silencio «mientras las personas son gaseadas» como «complicidad», igual que cuando «el mundo permaneció silencioso cuando Hitler empezó una campaña que concluyó con el exterminio casi total de los judíos europeos» y advirtió de que «no podemos permanecer silenciosos otra vez ante el genocidio». La administración Reagan se opuso con firmeza a las sanciones e insistió en que el asunto se silenciara, mientras que ampliaba, al mismo tiempo, su apoyo al asesinato de masas. En el mundo árabe, «la prensa de Kuwait fue una de las más entusiastas, entre los medios de comunicación árabe, entre las que apoyaron a Bagdad en su cruzada contra los kurdos», informa el periodista Adel Darwish.

En enero de 1991, mientras resonaban los tambores de guerra, la Comisión Internacional de Juristas declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que «tras haber perpetrado las violaciones más flagrantes contra su propia población sin una palabra de reproche por parte de las Naciones Unidas, Irak debe haber concluido que puede hacer todo lo que quiera»; en este contexto, las Naciones Unidas significa, básicamente, EE.UU. y el Reino Unido. Esa verdad debe enterrarse junto con el derecho internacional y otras distracciones «utópicas».²²

22. David Korn (comp.), *Human Rights in Iraq*, Yale, Human Rights Watch, 1989; CARDRI (Committee Against Repression and for Democratic Rights in Iraq) [Comité contra la represión y para los derechos democráticos en Irak], *Saddam's Iraq*, Zed, 1986, 1989, págs. 236 y sigs.; Dilip Hiro, *The Longest War*, Routledge, 1991, pág. 53; Rezun, *Saddam Hussein's Gulf Wars*, págs. 43 y sigs.; Darwish y Gregory Alexander, *Unholy Babylon*, St. Martin's, 1991, págs. 78 y sigs.; John Gittings, «How West Propped Up Saddam's Rule», *GW*, 10 de marzo de 1991.

Un comentarista poco amable podría señalar que la reciente tolerancia de EE.UU./Reino Unido con respecto al gas venenoso y a la guerra química no es demasiado sorprendente. Los británicos usaron armas químicas en su intervención de 1919 en el norte de Rusia contra los bolcheviques y, según el mando británico, con gran éxito. Como secretario de Estado en el Ministerio de Guerra en 1919, Winston Churchill se mostraba entusiasta con respecto a la posibilidad de «usar gas venenoso contra tribus no civilizadas» —kurdos y afganos— y autorizó al mando de Oriente Próximo de la RAF a usar armas químicas «contra árabes recalcitrantes como experimento», desatendiendo las objeciones del Ministerio de la India y calificándolas de «poco razonables», y deplorando además «los remilgos sobre el uso de gas»: «No podemos, bajo ninguna circunstancia, acceder a no utilizar cualquiera de las armas disponibles para lograr la rápida conclusión del desorden que prevalece en la frontera», explicó; las armas químicas son simplemente «la aplicación de la ciencia occidental a la guerra moderna».²³

La administración Kennedy fue pionera en el uso masivo de armas químicas contra civiles al lanzar sus ataques contra Vietnam del Sur en 1961-1962. Han habido muchas y adecuadas manifestaciones de preocupación sobre sus efectos en los soldados estadounidenses, pero no sobre los efectos, incomparablemente más graves, en la población civil, por lo menos en EE.UU. En un diario de circulación masiva israelí, el respetado periodista Amnon Kapeliouk informaba sobre su visita en 1988 a Vietnam, donde descubrió que «miles de vietnamitas siguen muriendo a consecuencia de la guerra química estadounidense», citando estimaciones de un cuarto de millón de víctimas en Vietnam del Sur y describiendo las «aterrorizadoras» escenas en hospitales del sur, donde los niños morían de cáncer y de horribles deformidades de nacimiento. El objetivo de la guerra química fue Vietnam del Sur, no Vietnam del Norte —donde no se registran esas consecuencias—, informa Kapeliouk. También hay pruebas sustanciales acerca del uso, por parte de EE.UU., de armas biológicas contra Cuba, publicado como noticia menor en 1977, lo que, en el peor de los casos, sólo es un pequeño componente del continuado terrorismo estadounidense.²⁴

23. Andy Thomas, *Effects of Chemical Warfare*, Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], Taylor & Francis, 1985, cap. 2. Véase mi *Turning the Tide: US Intervention in Central America and the Struggle for Peace*, Cambridge, MA., South End Press, 1985, pág. 126 (trad. cast.: *La quinta libertad*, Barcelona, Crítica, 1985) y *Detering Democracy*, op. cit., págs. 181 y sigs.

24. Sobre Vietnam véase mi *Necessary Illusions*, op. cit., págs. 38 y sigs. Sobre Cuba véase Noam Chomsky y Edward Herman, *Political Economy of Human Rights* (vol. 1: The Wa-

Dejando de lado esos precedentes, actualmente EE.UU. y el Reino Unido están implicados en una forma mortal de guerra biológica en Irak. La destrucción de infraestructuras y la prohibición de importaciones para repararlas ha causado bajas, desnutrición y muertes prematuras a gran escala, incluyendo las de más de 500.000 niños, según las investigaciones de UNICEF, con un promedio de 5.000 niños muertos cada mes. En una amarga condena a las sanciones, el 20 de enero de 1998 cincuenta y cuatro obispos católicos citaron las palabras del arzobispo de la región del sur de Irak, quien informa de que «las epidemias asolan la región, llevándose a niños y a enfermos por miles», mientras que «los niños que sobreviven a la enfermedad sucumben a la desnutrición». La declaración de los obispos, reproducida íntegramente en el diario de Stanley Heller, *The Struggle*, apenas fue mencionada en la prensa. EE.UU. y el Reino Unido han asumido el liderazgo del bloqueo de programas de ayuda, por ejemplo retrasando la autorización del envío de ambulancias con el argumento de que se podrían usar para transportar tropas y prohibiendo el envío de insecticidas que impiden la propagación de enfermedades y el de repuestos necesarios para los sistemas sanitarios. Mientras tanto, los diplomáticos occidentales señalan que «EE.UU. se ha beneficiado directamente de la operación [humanitaria], tanto, si no más, que los rusos y los franceses», por ejemplo mediante la compra de petróleo iraquí por valor de 600 millones de dólares (lo que lo sitúa en segundo lugar, sólo precedido por Rusia) y mediante la venta, por parte de empresas estadounidenses, de 200 millones de dólares en bienes humanitarios a Irak. También informan de que la mayor parte del petróleo comprado por las compañías rusas termina en EE.UU.²⁵

El apoyo a Saddam por parte de Washington alcanzó tales extremos que EE.UU. accedió incluso a no tener en cuenta un ataque de la fuerza aérea iraquí al *USS Stark* que mató a treinta y siete miembros de la tripulación, un privilegio del que sólo disfrutaba Israel (en el caso del *USS Liberty*). El firme apoyo de Washington a Saddam, mucho después de cometerse los crí-

shington Connection and Third World Fascism, Cambridge, MA., South End Press, 1979, pág. 69), y mucho material posterior, incluyendo Alexander Cockburn, *Nation*, 9 de marzo de 1998.

25. *The Struggle*, New Haven, 21 de febrero de 1998; Maggie O'Kane, *Guardian*, 19 de febrero de 1998; Scott Peterson, *CSM*, 17 de febrero de 1998; Roula Khalaf, *FT*, 2 de marzo de 1998. El impacto del bombardeo y las sanciones se conoció inmediatamente; véase Jean Drèze y Haris Gazdar, *Hunger and Poverty in Iraq 1991*, London School of Economics, septiembre de 1991. Véase un repaso extenso en Geoff Simons, *The Scourging of Iraq*, Londres, Macmillan, 1996.

menes que tanto chocan ahora a la administración y al Congreso, llevó a la capitulación iraní ante «Bagdad y Washington», concluye Dilip Hiro en su historia de la guerra Irán-Irak. Los dos aliados habían «coordinado sus operaciones militares contra Teherán». El derribo de un avión civil iraní por los misiles-cruceiro guiados del *USS Vincennes* fue, según Hiro, la culminación de la «campana diplomática, miliar y económica» de Washington en apoyo a Saddam.²⁶

Éste fue llamado también a realizar las tareas propias de un Estado cliente: por ejemplo, entrenar a varios cientos de libios enviados a Irak por EE.UU. para que pudieran derrocar al gobierno de Gadafi, según reveló el ex ayudante de Reagan en la Casa Blanca Howard Teicher.²⁷

Si Saddam fue elevado a la condición de «bestia de Bagdad» no fue por sus crímenes masivos. Más bien fue porque se salió de la fila, de manera semejante al criminal Noriega, de mucha menor envergadura, cuyos principales crímenes fueron cometidos también cuando era un cliente de EE.UU.

ESTADOS CANALLAS EXENTOS

Las características del «Estado canalla» reciben una mayor clarificación con la reacción de Washington a los levantamientos en Irak en marzo de 1991, inmediatamente después del cese de las hostilidades. El Departamento de Estado reiteró formalmente su negativa a tener ningún trato con la oposición democrática iraquí e, igual que antes de la guerra del Golfo, el acceso a los principales medios de comunicación estadounidenses le fue virtualmente denegado. «Las reuniones políticas con ellos no resultarían coherentes con nuestra política en este momento», declaró el portavoz del Departamento de Estado Richard Boucher. «Este momento» era el 14 de marzo de 1991, mientras Saddam estaba diezmado a la oposición en el sur bajo la mirada del general Schwarzkopf, quien se negó incluso a permitir que los oficiales militares rebeldes tuvieran acceso a las armas iraquíes capturadas. Si no hubiera sido por la inesperada reacción pública, Washington no habría prestado ni siquiera un tibio apoyo a los rebeldes kurdos, sometidos al mismo tratamiento poco después.

Los líderes de la oposición iraquí captaron el mensaje. Leith Kubba, jefe del Movimiento Reformista Democrático Iraquí con sede en Londres, sos-

26. Hiro, *Longest War*, op. cit., págs. 239 y sigs.

27. AP, *NYT*, 26 de mayo de 1993.

tuvo que EE.UU. apoyaba una dictadura militar e insistió en que «los cambios de régimen deben venir desde dentro, de las personas que ya están en el poder». El banquero Ahmed Chalabi, establecido en Londres y jefe del Congreso Nacional Iraquí, afirmó que «Estados Unidos, cubierto por la hoja de parra de la no interferencia en los asuntos iraquíes, está esperando que Saddam haga una carnicería con los insurgentes, con la esperanza de que pueda ser derrocado más tarde por un oficial adecuado», actitud enraizada en la política de EE.UU. de «mantener las dictaduras para mantener la estabilidad».

El razonamiento de la administración fue subrayado por el corresponsal diplomático jefe del *New York Times* Thomas Friedman. Oponiéndose a una rebelión popular, Washington esperaba que un golpe militar desplazara a Saddam, «y entonces Washington tendría lo mejor de todos los mundos: una junta iraquí con puño de hierro sin Saddam Hussein», un retorno a los días en los que Saddam, con su «puño de hierro [...], mantenía unido a Irak, para la gran satisfacción de los aliados de EE.UU.: Turquía y Arabia Saudí», por no mencionar a Washington. Dos años más tarde, en otro útil reconocimiento de la realidad, observó que «la política estadounidense siempre ha considerado que el puño de hierro del señor Hussein desempeña un papel útil en el mantenimiento de la unión de Irak», sosteniendo la «estabilidad». Hay pocas razones para creer que Washington haya modificado su preferencia por las dictaduras en lugar de las democracias que deploraba la ignorada oposición democrática iraquí, aunque ahora mismo preferiría, sin duda, un «puño de hierro» diferente. Si no, habrá que conformarse con Saddam.²⁸

El concepto de «Estado canalla» es sumamente matizado. Así, Cuba se considera uno de los principales «Estados canallas» debido a su supuesta participación en el terrorismo internacional, pero EE.UU. no cae en esa categoría pese a sus ataques terroristas contra Cuba durante cerca de cuarenta años, que aparentemente continuaban en 1997, según un importante informe de investigación del *Miami Herald* que no consiguió llegar a la prensa nacional (aquí; sí lo hizo en Europa). Cuba era un «Estado canalla» cuando sus fuerzas militares estaban en Angola apoyando al gobierno contra los ataques sudafricanos apoyados por EE.UU. Sudáfrica, en cambio, no era un Estado canalla entonces ni tampoco durante los años de Reagan, cuando causó más de 60.000 millones de dólares en daños y un millón y medio de muertos en

los Estados vecinos, según una comisión de la ONU, por no hablar de algunos acontecimientos internos, y con amplio apoyo de EE.UU./Reino Unido. Las mismas exenciones se aplican a Indonesia y a muchos otros.

Los criterios están muy claros: un «Estado canalla» no es sencillamente un Estado criminal, sino un Estado que desafía las órdenes de los poderosos, quienes, desde luego, están exentos.

MÁS SOBRE «EL DEBATE»

Que Saddam es un criminal es una verdad indudable, y uno debería alegrarse, supongo, de que EE.UU. y el Reino Unido, junto a las principales instituciones doctrinales, se hayan unido por fin a aquellos quienes condenaron «prematuramente» el apoyo de EE.UU./Reino Unido a los asesinatos generalizados. También es verdad que Saddam plantea una amenaza a cualquiera que esté a su alcance. Fuera de EE.UU. y el Reino Unido, tras las (ambiguas) transformaciones de sus posiciones a partir de agosto de 1990, hay poca unanimidad a la hora de comparar la amenaza que representa Saddam con otras. EE.UU./Reino Unido justificaron su plan de 1998 de usar la fuerza con la amenaza planteada por Saddam a la región, pero no había manera de ocultar el hecho de que la población de la región rechazaba esa salvación, y de una manera tan intensa que los gobiernos estuvieron obligados a unirse a la oposición.

Bahrein se negó a permitir que las fuerzas de EE.UU./Reino Unido usaran las bases de su territorio. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos describió las amenazas de acciones militares de EE.UU. como «malas y odiosas» y declaró que Irak no suponía una amenaza para sus vecinos. El ministro de Defensa saudí, el príncipe Sultán, ya había declarado que «no nos pondremos de acuerdo, y estamos en contra de atacar a Irak como pueblo y como nación», lo que llevó a Washington a abstenerse de solicitar el uso de las bases saudíes. Tras la misión de Annan, el experimentado ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Saud al-Faisal, insistió en que cualquier uso de las bases aéreas saudíes «debe ser un asunto de las Naciones Unidas, no de EE.UU.».

Un editorial del periódico semioficial egipcio *Al-Abram* describió la postura de Washington como «coercitiva, agresiva, insensata y despreocupada por las vidas de los iraquíes, que están innecesariamente sometidos a sanciones y humillaciones» y denunció la «agresión contra Irak» planificada por EE.UU. El Parlamento jordano condenó «toda agresión contra el territorio

28. NYT, 7 de julio de 1991; 28 de junio de 1993. Sobre Kubba, Chalabi, véase mi artículo en Peters, *Collateral Damage*.

de Irak y todo daño que se puede infligir al pueblo iraquí»; el ejército recibió la orden de aislar la ciudad de Maan tras dos días de revueltas proiraquíes. Un profesor de ciencia política de la Universidad de Kuwait advirtió de que «Saddam ha venido a representar la voz de los sin voz en el mundo árabe», expresando la frustración popular sobre el «Nuevo Orden Mundial» y el apoyo de Washington a los intereses israelíes.

Incluso en Kuwait, el apoyo a la posición estadounidense fue, en el mejor de los casos, «tibio» y «cínico en relación a las motivaciones de EE.UU.», reconoció la prensa. «Las voces airadas en las calles del mundo árabe, desde las congestionadas chabolas de El Cairo hasta las relucientes capitales de la península arábiga, han ido subiendo de tono a medida que el redoble de los tambores de guerra estadounidenses contra Irak se vuelve más sonoro», informó Charles Sennott, el corresponsal del *Boston Globe*.²⁹

A la oposición democrática iraquí se le concedió una modesta presencia en los medios de comunicación principales, quebrándose así la pauta seguida anteriormente. En una entrevista telefónica con el *New York Times*, Ahmed Chalabi reiteró la posición expuesta con más detalle en Londres semanas atrás: «Sin un plan político para derribar el régimen de Saddam, el ataque militar será contraproducente», sostuvo, ya que supondría matar a miles de iraquíes, puede que incluso reforzando a Saddam y a sus armas de destrucción masiva y dándole «una excusa para expulsar a la UNSCOM [los inspectores de armas de la ONU]», que de hecho han destruido muchas más armas e instalaciones de producción que los bombardeos de 1991. Los planes de EE.UU./Reino Unido serían «peor que nada». Las entrevistas realizadas a líderes de la oposición de varios grupos registraron una «casi unanimidad» en la oposición a una acción militar que no sentara las bases para una revuelta para derrocar a Saddam. Dirigiéndose a un comité parlamentario, Chalabi sostuvo que era «moralmente indefendible atacar a Irak sin una estrategia» para derrocar a Saddam.

En Londres, la oposición también esbozó un programa alternativo: 1) declarar a Saddam criminal de guerra; 2) reconocer un gobierno provisional iraquí formado por la oposición; 3) descongelar cientos de millones de dólares de depósitos iraquíes en el extranjero; y 4) restringir las fuerzas de Sad-

29. David Marcus, *BG*, 18 de febrero de 1998; Roula Khalaf, Mark Suzman, David Gardner, *FT*, 23 de febrero de 1998; *FT*, 9 de febrero de 1998; Robin Allen, *FT*, 3 de marzo de 1998; Steven Lee Myers, *NYT*, 9 de febrero de 1998; Douglas Jehl, *NYT*, 9 de febrero de 1998; Charles Sennott, *BG*, 18 de febrero de 1998, 19 de febrero de 1998; Daniel Pearl, *WSJ*, 25 de febrero de 1998.

dam mediante una «zona de exclusión al tránsito» o extender la «zona de exclusión aérea» hasta cubrir todo el país. EE.UU. debería «ayudar al pueblo iraquí a expulsar a Saddam del poder», explicó Chalabi al Comité de los Servicios Armados del Senado. Junto a otros líderes de la oposición, Chalabi «rechazó el asesinato, las operaciones encubiertas de EE.UU. o sus operaciones terrestres», informó Reuters, haciendo, en cambio, un llamamiento a «una insurrección popular». Propuestas similares han aparecido ocasionalmente en EE.UU. Washington sostiene haber intentado apoyar a los grupos de la oposición, pero la interpretación que hacen los propios grupos es diferente. El punto de vista de Chalabi, hecho público en Inglaterra, es similar al que tenía años atrás: «Todo el mundo dice que Saddam está cerrado en sus ideas, pero quienes lo están son los estadounidenses y los británicos con su negativa a apoyar la idea de cambio político».³⁰

La oposición en la región se consideraba un problema del que evadirse, no un factor que debiera tenerse en cuenta, igual que ocurría con el derecho internacional. Lo mismo ocurría con las advertencias de los altos funcionarios de las Naciones Unidas y de otras organizaciones asistenciales presentes en Irak de que el bombardeo planificado podría tener consecuencias «catastróficas» sobre personas que ya estaban sufriendo terriblemente y de que podría llevar a la conclusión de las operaciones humanitarias que al menos han dado cierto alivio a la población.³¹ Lo que interesa es dejar claro que «lo que decimos lo hacemos», como proclamó triunfalmente el presidente Bush al anunciar el Nuevo Orden Mundial mientras las bombas y los misiles caían en 1991.

Mientras Kofi Annan se estaba preparando para ir a Bagdad, el ex presidente iraní Rafsanjani, «todavía una figura central en Teherán, fue recibido en audiencia por el enfermo rey Fahd en Arabia Saudí», informó el corresponsal británico en Oriente Próximo David Gardner, «de manera que contrastaba con el trato dado a Madeleine Albright [...] en sus viajes recientes a Riad en busca del apoyo del principal aliado estadounidense en el Golfo». Cuando la visita de diez días de Rafsanjani concluyó el 2 de marzo de 1998, el ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Saud, la describió como «un paso más en la dirección correcta hacia la mejoría de relaciones», reiterando que «el principal elemento desestabilizador en Oriente Próximo y la causa de los otros problemas en la región» es la política de Israel hacia los

30. David Fairhall e Ian Black, *GW*, 8 de febrero de 1998; Reuters, *BG*, 3 de marzo de 1998; Douglas Jehl, *NYT*, 22 de febrero de 1998; Jimmy Burns, *FT*, 15 de febrero de 1998.

31. Peterson, *CSM*, 17 de febrero de 1998.

palestinos y el apoyo de EE.UU. a esa política, que podría activar unas fuerzas populares que Arabia Saudí teme enormemente, así como socavar su legitimidad como «guardián» de los lugares santos islámicos, incluyendo la Cúpula de la Roca en Jerusalén oriental (en este momento eficazmente anexo por los programas EE.UU./Israel como parte de su intento de extender el «gran Jerusalén» prácticamente hasta el valle del Jordán para que Israel siga reteniéndolo). Poco antes, los Estados árabes habían boicoteado una cumbre económica patrocinada por EE.UU. en Qatar que pretendía avanzar en el proyecto del «Nuevo Oriente Próximo» de Clinton y Peres. En lugar de ello, asistieron a una conferencia islámica en Teherán en diciembre, en la que incluso participó Irak.³²

Éstas son tendencias de importancia considerable que se vinculan a las preocupaciones de fondo que motivan la política de EE.UU. en la región: su insistencia, desde la Segunda Guerra Mundial, en controlar las principales reservas de energía del mundo. Como muchos han observado, en el mundo árabe hay un temor y un resentimiento crecientes hacia la vieja alianza Israel-Turquía, formalizada en 1996 y ahora considerablemente reforzada. Durante muchos años, esta alianza había sido un componente de la estrategia estadounidense de controlar la región con «una ronda de policías locales», en palabras del secretario de Defensa de Nixon. Aparentemente las propuestas iraníes sobre acuerdos de seguridad regionales en sustitución del dominio estadounidense cuentan con una aceptación cada vez mayor. Una cuestión relacionada con ello es el conflicto cada vez más intenso sobre los oleoductos para transportar petróleo de Asia central a los países ricos, dado que una salida natural pasa por Irán. Y las empresas energéticas estadounidenses no se alegrarán de ver que rivales extranjeros —entre ellos China y Rusia— obtienen acceso privilegiado a las reservas de petróleo iraquíes —sólo inferiores a las de Arabia Saudí por sus dimensiones— o al gas natural, petróleo y otros recursos iraníes.

Por el momento, los planificadores de Clinton pueden sentirse aliviados de haber escapado por ahora de la «caja» que han construido, que no les estaba dejando otra opción que la de un bombardeo a Irak, algo que podría haber resultado perjudicial incluso para los intereses que representan. Es un respiro transitorio que ofrece oportunidades a los ciudadanos de los Estados guerreros de impulsar cambios en las percepciones y las posiciones, cambios que podrían producir una transformación importante en un futuro no muy lejano.

32. David Gardner, *FT*, 28 de febrero de 1998; Robin Allen, *FT*, 3 de marzo de 1998.

CRISIS EN LOS BALKANES*

El 24 de marzo de 1999, las fuerzas de la OTAN, lideradas por EE.UU., lanzaron ataques con misiles-crucero y bombas contra objetivos situados en la República Federal de Yugoslavia, «hundiendo a EE.UU. en un conflicto militar que, según el presidente Clinton, era necesario para frenar la limpieza étnica y estabilizar Europa oriental», como se informaba en las primeras páginas de los periódicos. En un discurso televisado, Clinton explicó que, al bombardear Yugoslavia, «estamos defendiendo nuestros valores, protegiendo nuestros intereses y contribuyendo a la causa de la paz».¹

Según fuentes occidentales, el año anterior habían sido asesinadas alrededor de 2.000 personas en la provincia yugoslava de Kosovo y varios cientos de miles de personas se convirtieron en refugiados internos. Los responsables de la catástrofe humanitaria eran, sobre todo, las fuerzas militares y policiales yugoslavas, y las víctimas principales eran albanokosovares, que constituyen alrededor del 90 % de la población (las estimaciones varían). Según el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, tras tres días de bombardeos varios miles de refugiados habían sido expulsados a Albania y Macedonia, dos países vecinos. Los refugiados informaron de que el terror había llegado a Prístina, la capital, que antes no había sido prácticamente afectada por él, y explicaron unas historias plausibles de destrucción a gran escala de pueblos, asesinatos y aumento radical del número de refugiados, tal vez un intento de expulsar a buena parte de la población albanesa. En dos semanas el número de refugiados, la mayoría provenientes de las regiones del sur de Kosovo fronterizas con Macedonia y Albania, había llegado a ser de unos 350.000, mientras que un número desconocido de serbios huía hacia el norte, a Serbia, escapando del aumento de la violencia proveniente de tierra y aire.

* Este artículo se publicó originalmente en *Z Magazine*, mayo de 1999. Véanse también *The New Military Humanism*, op. cit., y *A New Generation Draws the Line*, op. cit.

1. Ann Scales y Louise Palmer, Kevin Cullen, *BG*, 25 de marzo de 1999; Bill Clinton, *NYT*, 23 de mayo de 1999.

